

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos antecedentes Rol Corte Suprema N° 22.270-2021, se trajeron los autos en relación para conocer de la reclamación presentada por Socofar S.A., en contra de la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante TDLC), que no admitió a tramitación la consulta promovida, por considerar que la pretensión resulta propia de un procedimiento contencioso.

Los antecedentes se inician con la consulta de la señalada empresa, entablada a fin que se emita un pronunciamiento acerca de si el trato diferenciado otorgado por los laboratorios farmacéuticos en la determinación del precio de sus productos a clientes públicos y privados que participan en el segmento de distribución farmacéutica, se encuentra o no conforme con la libre competencia.

Expone que el mercado farmacéutico se segmenta en producción, distribución y comercialización de productos, participando Socofar en la etapa de aprovisionamiento o distribución mayorista.

El año 2020 la Fiscalía Nacional Económica realizó un estudio del mercado de medicamentos, constatando diferencias en los precios que los laboratorios cobran a



sus distintos compradores, para iguales productos y volúmenes de compra, pagando las grandes cadenas de farmacias, en promedio, un 70% más que el sector público y un 60% más que los compradores institucionales privados.

A lo anterior se añade que el 8 de enero de 2020 se publicó la Ley N°21.198, que autorizó la intermediación de medicamentos por parte de Cenabast, de modo que hay establecimientos beneficiados con las condiciones preferentes que se otorga a este último órgano, con precios notoriamente inferiores a los otorgados a Socofar S.A. y se asume también a las demás distribuidoras, lo que podría dar cuenta de una diferenciación entre actores públicos y privados, sin que la consultante cuente con certeza de si, para ello, existe o no una justificación económica.

Afirma que revisó diversos precios a los que accedió Cenabast en licitaciones, desde la entrada en vigencia de la Ley N°21.198 y advirtió diferencias sustantivas en comparación con los precios pagados por la actora, por idénticos productos, dando ejemplos de ello.

Con todo lo anterior y, teniendo en consideración que los laboratorios gozan de poder de mercado, corresponde hacer una evaluación de los criterios que aplican al efecto, para que las distribuidoras cuenten con claridad y certeza acerca de la forma en que se



determinan los precios, tanto respecto de clientes públicos como privados. Como factor adicional a considerar, en la práctica el Estado se ha convertido en un competidor directo de las empresas de distribución y podría tener ventajas irreplacables para éstas, derivadas de los precios preferentes que le otorgan los laboratorios, lo cual podría afectar la viabilidad de las distribuidoras, a menos que haya claridad sobre los criterios aplicados y las condiciones que Socofar y otras de su naturaleza, debieran cumplir para acceder a precios y condiciones análogos, seguir compitiendo y así evitar que queden fuera del mercado.

Asegura que no pretende imputar a los laboratorios conducta anticompetitiva alguna, sino que de buena fe somete a consideración del tribunal el sistema de comercialización diferenciado, a efecto de que emita un pronunciamiento y, si lo estima necesario, se fijen las condiciones que deben ser cumplidas en esta materia, en orden a obtener claridad y certeza respecto de los criterios aplicados por los laboratorios en la determinación del precio de sus productos a clientes públicos y privados y la conformidad de dicha aplicación práctica con la libre competencia.

Solicita, en definitiva, que el tribunal se pronuncie acerca de si el trato diferenciado otorgado por los laboratorios farmacéuticos en la determinación del



precio de sus productos a clientes públicos y privados, que participan en el segmento de distribución farmacéutica, se encuentra o no conforme con la libre competencia, de acuerdo a las condiciones de mercado involucradas; estableciendo, si procediere, las condiciones que las aludidas empresas deberán cumplir a este respecto.

Resolviendo la petición anterior, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia razona que, como se ha resuelto en ocasiones anteriores, es la naturaleza del asunto y no la voluntad de las partes la que determina que el mismo sea de carácter contencioso o no contencioso.

En este sentido, no obstante que Socofar presenta el trato diferenciado de los laboratorios como un asunto no contencioso, lo cierto es que, como se observa en los planteamientos que realiza en su consulta, en los hechos reprocha el cobro, por parte de laboratorios - a quienes atribuye poder de mercado - de precios diferenciados a distintos clientes, en su desmedro; vale decir, imputa la existencia de un trato discriminatorio, lo que envuelve una contienda. A mayor abundamiento, la consultante manifiesta que dicho trato no estaría justificado en razones económicas, lo que podría impedir, restringir o entorpecer la libre competencia o tender a ello, en los términos del artículo 3° del Decreto Ley N°211. De esta



forma, acoger la petición formulada por Socofar conllevaría necesariamente determinar si el trato diferenciado que se predica de los laboratorios, constituye una conducta contraria a la libre competencia, lo que transforma el asunto en contencioso.

Por consiguiente, se estima que el asunto sometido a conocimiento del tribunal por parte de Socofar, para el ejercicio de la potestad consultiva que contempla el artículo 18 N°2 del Decreto Ley N°211, contiene alegaciones de naturaleza tal que sólo podrían ser conocidas en un procedimiento contencioso, lo que hace que sea improcedente iniciar el procedimiento no contencioso, razón por la cual la consulta no se admite a tramitación.

En contra de esta determinación, la empresa Socofar S.A. dedujo recurso de reclamación, alegando que se vio en la necesidad de iniciar el procedimiento, porque no cuenta con la mínima certeza respecto de cuáles son los criterios aplicados por los laboratorios en la determinación de los precios de sus productos a clientes públicos y privados, si cumplen o no la normativa de libre competencia y si es necesaria la adopción de medidas que en lo sucesivo rijan el actuar de estos agentes del mercado. En este contexto, no se ha imputado conducta alguna, no se solicita analizar conductas pasadas, como tampoco imponer sanciones, solamente se ha



querido someter a consideración este sistema de comercialización diferenciado.

Reprocha, por tanto, que la resolución impugnada infringe el deber del tribunal de velar por la libre competencia en los mercados, como también el contenido y alcance del artículo 18 N°2 del Decreto Ley N°211, por la vía de calificar los hechos, actos y contratos cuya revisión se solicita, sin reparar que es precisamente ello lo que se busca mediante su revisión y, en ese sentido, no es efectivo que en el presente caso se pudiere vulnerar un racional y justo procedimiento.

Añade que la resolución transgrede lo resuelto por esta Corte Suprema, en tanto hace una referencia errónea a otra sentencia, donde el rechazo se fundó en que se contenían pretensiones sancionatorias en el petitorio, cuyo caso no es el presente.

Estima, por tanto, que se cumplen todos los presupuestos para decretar la admisibilidad de la consulta, esto es, se contiene un asunto no contencioso, respecto de actos futuros, se ha solicitado fijar condiciones preventivas y existe un interés legítimo de parte de Socofar, razón por la cual, además, el tribunal ha infringido el principio de inexcusabilidad al desecharla.



Por estos motivos, solicita que la decisión impugnada sea dejada sin efecto y se declare que la consulta es admitida a tramitación.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de manera previa a iniciar el análisis concreto del arbitrio impugnatorio, relevante resulta destacar que el Decreto Ley N°211 presenta una finalidad de carácter económico, entre cuyos objetivos se encuentra la tutela, reglamentación y resguardo de la libre competencia, que forma parte del orden público económico desarrollado en la Constitución, generando un marco regulatorio respecto de la actividad del Estado y de los particulares, en torno a la protección de las garantías individuales (SCS Roles N° 4.108-2018 y N°31.502-2018).

Diferentes normas constitucionales desarrollan lo que se ha denominado la "*Constitución Económica*", que busca precisar y resguardar a las personas su derecho a planificar, desarrollar y ejecutar sus proyectos de vida personal y de realización material, para concretar y llevar adelante su capacidad de emprendimiento. Los artículos 1°, 3°, 8°, 19 N° 2, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; 20, 21, 38 y 108 de la Constitución Política de la República dan origen a un abanico de disposiciones en que las personas encuentran seguridad en los enunciados anteriores.



En el campo del derecho económico se estructuraron las nociones de orden público económico, libre competencia y competencia desleal, asociándose la libre competencia con el artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, por consignar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita, al que se une la reserva legal en materia de regulación económica, la igualdad ante la ley, ante la justicia y ante las cargas tributarias, proscribiendo cualquier discriminación, la igualdad de trato económico que debe entregar el Estado y sus órganos, la libre apropiación de los bienes, la consagración del derecho de propiedad en las distintas especies y, ciertamente, la garantía de las garantías, esto es, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Conjuntamente con lo anterior, debe considerarse la estructura económica basada en la autoridad reguladora del Banco Central, para luego desarrollar toda una institucionalidad en materia de orden público económico, que, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corte, es un conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía



de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución o *"la recta disposición de los diferentes elementos sociales que integran la comunidad - públicos y privados - en su dimensión económica, de la manera que la colectividad estime valiosa para la obtención de su mejor desempeño en la satisfacción de las necesidades materiales del hombre"* (Víctor Avilés Hernández, "Orden Público Económico y Derecho Penal", Editorial Jurídica Conosur Ltda., 1998. Página 218).

Segundo: Que, conforme a lo expuesto, resulta que el derecho de la competencia tiene como objetivo primordial neutralizar posiciones de poder de mercado de los agentes económicos y, en tal sentido, forma parte de la constitución económica, entendido como un orden basado en que la libertad es un medio a través del cual se consolida el bienestar de la Nación.

En este contexto, la garantía consagrada en el artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental es de contenido vasto, puesto que comprende la libre iniciativa y la prosecución indefinida de cualquier actividad económica, sea productiva, comercial, de intercambio o de servicio, habiendo sido introducida por el Constituyente de 1980 con especial énfasis y estudio, según consta de la historia fidedigna del precepto. Respecto de ésta



garantía se ha dicho que "si la Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica, personalmente o en sociedad, organizadas en empresas, en cooperativas o en cualquier otra forma de asociación lícita, con el único requisito de respetar las normas que regulan la respectiva actividad (...) la obligación de no atentarse contra de la garantía no sólo se extiende al legislador, al Estado y a toda autoridad, sino también a otros particulares que actúan en el ámbito de la economía nacional. Una persona, natural o jurídica, que desarrolla una actividad económica dentro de la ley, sólo puede salir de ella voluntariamente o por ineficiencia empresarial que la lleva al cierre o a la quiebra. Pero es contraria a esta libertad, y la vulnera, el empleo por otros empresarios de arbitrios, como pactos, acuerdos, acciones y toda clase de operaciones que tengan por objeto o den o puedan dar como resultado dejar al margen de la vida de los negocios a quien esté cumpliendo legalmente una tarea en la economía del país". (Enrique Evans de la Cuadra, "Los Derechos Constitucionales". Editorial Jurídica de Chile, 1999. Página 318).

Es así como el derecho a desarrollar cualquier tipo de actividad económica, consagrado constitucionalmente, tiene límites, que se establecen en el mismo precepto



constitucional, esto es, la moral, el orden público y la seguridad nacional.

Lo anterior es trascendente, toda vez que la legislación de la libre competencia, en particular el Decreto Ley N°211, se erige como una norma perteneciente al orden público económico, que tiene distintas funciones respecto de la prerrogativa en estudio, puesto que, por una parte, vela porque la libertad de emprendimiento y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sea respetado tanto por los particulares como por el Estado. Sin embargo, desde otra perspectiva, limita el ejercicio de tal derecho, dado que el atentado contra la libertad puede provenir no sólo del Estado, sino también de particulares quienes, esgrimiendo su propia libertad, pretendan alcanzar y ejercer un poder indebido en el mercado, violentando así, no sólo el derecho de los otros actores del ámbito económico en el que se desenvuelven, sino que afectando los intereses de los consumidores, consecuencia que, en último término, se traduce en una afectación del bienestar de la generalidad de los miembros de la Nación.

Así, el sistema jurídico establecido en nuestro país corresponde a los aspectos orgánicos y sustanciales destinados a resguardar el mercado, propender a la sana competencia entre quienes desarrollan actividades económicas, permitiendo, de esta forma, que se conjuguen



diferentes leyes del mercado, entre ellas la libre iniciativa en materia económica, en que el precio de los bienes y servicios queda fijado por la ley de la oferta y la demanda, con lo cual la sociedad pueda obtener equilibrio entre la mejor calidad y menores precios posibles de los bienes y servicios transables comercialmente, con la justa ganancia de los actores del mercado. Es por ello que el Derecho de la Competencia se ha definido como *"el conjunto de normas jurídicas que pretenden regular el poder actual o potencial de las empresas sobre un determinado mercado, en aras del interés público"* (Robert Merkin, citado por Alfonso Miranda Londoño y Juan Gutiérrez Rodríguez en "Fundamentos económicos del derecho de la competencia: los beneficios del monopolio vs. los beneficios de la competencia", Revista de Derecho de la Competencia, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2015. Página 333), señalando los mismos autores que *"el derecho de la competencia prohíbe la realización de prácticas restrictivas de la competencia, la adquisición de una posición de dominio en el mercado a través de la realización de dichas prácticas y el abuso de la posición dominante"* (Ibidem. Página 276).

Tercero: Que, solamente teniendo en cuenta este contexto, donde se inserta la regulación contenida en el Decreto Ley N°211, es que se entiende la existencia y



relevancia de la jurisdicción de carácter voluntario que se entrega al TDLC, respecto de la cual puede indicarse que *"el legislador al establecer un procedimiento de jurisdicción voluntaria lo hace exactamente para garantizar la protección de un derecho socialmente relevante. Es el juez u otro órgano o sujeto que actúa preventivamente y para dar certeza y así proteger el bien o el derecho que, en la ausencia de la participación de la jurisdicción, quedaría entregado a la voluntad de los particulares"*. En resumen, en el Estado Constitucional el Juez tiene el deber de dar protección a los derechos, *"especialmente a los fundamentales y a los de mayor relevancia social (...) El magistrado, en la jurisdicción voluntaria es llamado incuestionablemente para dar protección a los derechos"* (Luis Guilherme Marinoni, Alvaro Pérez Ragone, Raúl Núñez Ojeda, "Fundamentos del proceso civil, Hacia una teoría de la adjudicación", Abeledo Perrot - Legal Publishing, 2010. Página 138).

Cuarto: Que, a continuación, se hace imprescindible establecer el marco jurídico que rige el presente procedimiento, labor para la cual es menester reproducir algunas disposiciones del Decreto Ley N°211.

El artículo 5° señala: *"El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya*



función será prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia".

A su turno, el artículo 18 indica: "El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá las siguientes atribuciones y deberes: (...) 2) Conocer, a solicitud de quienes sean parte o tengan interés legítimo en los hechos, actos o contratos existentes o por celebrarse distintos de las operaciones de concentración a las que se refiere el Título IV, o del Fiscal Nacional Económico, los asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las disposiciones de esta ley, para lo cual podrá fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos".

Luego, el artículo 31 establece el procedimiento aplicable y el régimen recursivo, disponiendo en su inciso final: "Las resoluciones o informes que dicte o emita el Tribunal en las materias a que se refiere este artículo, podrán ser objeto del recurso de reposición. Las resoluciones de término, sea que fijen o no condiciones, sólo podrán ser objeto del recurso de reclamación a que se refiere el artículo 27. Dicho recurso deberá ser fundado y podrán interponerlo el o los consultantes, el Fiscal Nacional Económico y cualquiera de los terceros que hubieren aportado antecedentes de conformidad con lo dispuesto en el número 1".



Quinto: Que el tenor de las normas transcritas en el considerando anterior deja en evidencia que el procedimiento en el cual se desarrolla la consulta es, precisamente, de naturaleza jurídica no contenciosa, puesto que no cuenta con las características y principios que informan aquel previsto en los artículos 18 N°1 y 19 a 29 del Decreto Ley N° 211. La doctrina es pacífica en señalar que en un procedimiento de carácter no contencioso el órgano público conoce de materias en que se parte del supuesto de la falta de controversia jurídica, sin que exista propiamente una acción, proceso y partes, sino que un requirente o interesado y un órgano requerido.

Sexto: Que, en concordancia con lo anterior, esta Corte ya ha señalado que, a través del artículo 18, numeral 2°, del Decreto Ley N°211, el legislador otorgó al Tribunal la facultad de prevenir que un determinado hecho, acto o convención que se presente para su conocimiento pueda llegar a impedir, restringir o entorpecer la libre competencia o tender a producir dichos efectos. Tal labor preventiva tiene por objeto entregar certeza jurídica ex-ante, con los beneficios establecidos en el artículo 32 del citado Decreto Ley N°211 y con carácter vinculante para los agentes económicos relacionados con el mercado relevante.



Séptimo: Que, establecidos estos lineamientos generales, resulta también de la máxima relevancia formular ciertas delimitaciones en la naturaleza y fines del procedimiento no contencioso en materia de libre competencia. En efecto, no es posible utilizar el procedimiento de la consulta con la finalidad que el TDLC imponga condiciones que regulen de manera abstracta un mercado en general. Para ello el Tribunal podría ejercer su potestad para dictar Instrucciones Generales, establecida en el artículo 18 N°3 del Decreto Ley N°211.

Por otro lado, tampoco resulta procedente confundir las condiciones que puedan ser impuestas por el TDLC en el marco del ejercicio de la potestad contenida en el artículo 18 N°2 del Decreto Ley N°211, con aquellas medidas de orden preventivo, correctivo o prohibitivo que podría establecer en una sentencia como complemento o en lugar de una sanción en el marco del ejercicio de su potestad jurisdiccional. En este orden de ideas, aun cuando el artículo 26 señale como posibles medidas a adoptar en la sentencia definitiva, la de *"modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios a las disposiciones de la presente ley"*, tal prerrogativa debe entenderse de manera matizada cuando se trata de un procedimiento no contencioso, cariz que está dado precisamente por la extensión de la competencia del TDLC que, a su vez,



determina la mayor o menor particularidad o identificación con un caso concreto, que tendrá la decisión.

En consecuencia, aquello que se resuelva por la vía de la consulta se encuentra en un punto intermedio entre las instrucciones generales y las medidas sancionatorias que sólo podrían tener efectos para las partes del juicio.

De otro modo, la existencia de una potestad consultiva en materia de actos y contratos existentes, no tendría justificación.

Octavo: Que, en este particular, coincide esta Corte con aquello que ha afirmado la doctrina, en cuanto a que *"los asuntos relacionados con todo tipo de hechos, actos o contratos de agentes económicos que puedan afectar negativamente el proceso competitivo en los mercados pueden ser consultados. Esto comprende desde los que digan relación con los niveles de concentración que existan en determinadas industrias, hasta los relativos a actos materiales, como las diversas actuaciones de personas, asociaciones o empresas que puedan facilitar comportamientos anticompetitivos o generar efectos adversos para la libre competencia. Por cierto, toda la amplia gama de actos jurídicos que puedan incidir negativamente en el desempeño competitivo de los agentes que participan en un mercado pueden ser incluidos aquí"*.



(Javier Velozo A. y Daniela González D. Reflexiones en torno a algunas de las facultades extrajurisdiccionales del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, En: La Libre Competencia en el Chile del Bicentenario, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y Centro de Libre Competencia UC, Editorial Thomson Reuters. Santiago, Chile, 2011, pág. 33).

En otras palabras, el ejercicio de la potestad consultiva no impide el análisis de la conformidad de ciertos hechos con la legislación que rige la materia, siempre y cuando éstos sean determinados de manera concreta y no exista una imputación formal y directa - y, a la vez, una pretensión sancionatoria - relacionada con ilícitos anticompetitivos. Bajo estos parámetros, no sería posible instrumentalizar la consulta, utilizándola para una decisión anticipada de un asunto contencioso y así restringir las posibilidades de defensa de la contraria, puesto que las medidas que es posible adoptar en uno y otro procedimiento tienen una naturaleza distinta, tratándose en este caso de disposiciones meramente preventivas, destinadas a evitar eventuales infracciones a la libre competencia y no a juzgar responsabilidad. El asunto sometido al conocimiento del tribunal no debe implicar la existencia de una controversia entre partes, sino sólo la petición para que se emita un pronunciamiento judicial de calificación o



determinación de la posible disconformidad entre ciertos hechos singulares y la libre competencia, apreciada en un mercado relevante concreto.

Relacionado con lo anterior, la promoción de una consulta no requiere de una afectación actual a los bienes jurídicos protegidos, sino una eventual, que precisamente será evitada o prevenida a través de la adopción de las medidas que el tribunal imponga, las cuales pueden ser propuestas por el consultante, sin resultar vinculantes para los sentenciadores, que pueden decretar aquéllas, como también otras que sean idóneas para la finalidad buscada.

Noveno: Que, entendida de esta forma, la potestad que se viene analizando se erige como una competencia consultiva-preventiva, para absolver consultas conducentes a otorgar certeza mínima a los actores del mercado, al calificar o determinar la eventual contradicción entre un hecho, acto o convención singular y la libre competencia apreciada en un mercado relevante concreto. No tiene por finalidad sancionar un injusto monopolístico específico, sino que se trata de medidas correctivas o prohibitivas dispuestas según las particularidades de cada caso, las que se adoptan con miras a restablecer o permitir la sana competencia. La potestad consultiva busca *"prevenir o evitar la comisión de un injusto monopolístico por la vía de pronunciarse sobre*



un hecho, acto o convención que no se ha ejecutado o celebrado, o advertir sobre las consecuencias nocivas para la libre competencia de la persistencia en un hecho, acto o contrato ya ejecutado o celebrado, solicitándose que aquél cese o éstos sean terminados o bien, de perseverarse en los mismos, éstos sean ajustados a ciertas condiciones que establecerá el propio Tribunal Antimonopólico" (Domingo Valdés Prieto, "Libre Competencia y Monopolio". Editorial Jurídica de Chile, 2006. Página 612). Por otro lado, también se ha dicho que, por la vía de este procedimiento, es posible subsanar el daño que pueda causar una operación sujeta a aprobación (Paulo Montt, Nicole Nehme, en "Libre Competencia y Retail: Un Análisis Crítico". Abelardo Perrot, 2010. Página 315).

Tales son los lineamientos que permiten otorgar un contenido propio a la potestad consultiva del TDLC.

Décimo: Que, entrando ahora al caso concreto, se ha planteado al tribunal la posible existencia de un trato diferenciado otorgado por los laboratorios farmacéuticos a sus distintos clientes públicos y privados que, sumado a los efectos de la dictación de la Ley N°21.198, generan condiciones de mercado que ceden en desmedro de las empresas distribuidoras y cuyo análisis se solicita del TDLC, en tanto estima la consultante, podrían favorecer



atentados a la libre competencia, de no constatarse una justificación económica para ello.

Undécimo: Que, a la luz de todo lo razonado hasta ahora, no hay duda de que el Tribunal, en ejercicio de estas facultades preventivas y a la luz de los citados artículos 18 N°2 y 31 del Decreto Ley N° 211, se encuentra facultado para conocer de las condiciones en que se desarrolla el mercado, con miras a determinar la efectividad o no de las diferencias de trato que se predicen de los laboratorios, en relación a distintos agentes y la existencia o no de una justificación para ello, todo lo cual no es posible afirmar de manera categórica en el actual estado de cosas, puesto que, precisamente, no se dispone de la información concreta para ello.

En otras palabras, lo buscado por el consultante ciertamente no es la imposición de una sanción, sino conocer las condiciones en que el mercado se desenvuelve, en tanto afirma contar con indicios, no confirmados, del comportamiento de uno de los agentes relevantes, que podría transgredir las normas sobre libre competencia. Lo anterior se condice también con la transparencia que debe constituir la base de todo mercado, a la luz de la cual los actores de éste deben contar con reglas claras y conocimiento acabado de todas las circunstancias que puedan afectarles en el desarrollo de su actividad.



Duodécimo: Que, en consecuencia, el ejercicio de la potestad consultiva en el presente caso demanda necesariamente el análisis de la efectividad del trato diferenciado que postula la actora que, de constatarse, debiera estar provisto de una racionalidad económica, de modo de no facilitar eventuales conductas anticompetitivas en este mercado específico para, finalmente y sólo de ser procedente, adoptar medidas generales tendientes a evitar que tal riesgo se materialice, las cuales podrán imponer ciertos lineamientos que deban respetarse en este tipo de transacciones.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, corresponde el acogimiento del recurso de reclamación, para efectos de disponer que la consulta planteada sea acogida a tramitación y, de este modo, se analicen por el TDLC los puntos objeto de consulta, previa solicitud de informe a los agentes económicos relacionados, además de los antecedentes necesarios para un adecuado conocimiento, en los términos que se han venido exponiendo en los motivos precedentes.

Por estos fundamentos, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 27 y 31 del Decreto Ley N°211, se resuelve que **se acoge** el recurso de reclamación deducido por Socofar S.A., en contra de la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el



Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, en su lugar, **se dispone** que la consulta planteada queda acogida a tramitación, a fin de resolver si se verifica un riesgo actual o potencial de conductas anticompetitivas en el mercado relevante propuesto, en la forma que se ha expresado en el cuerpo de la presente sentencia.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro (S) señor Contreras.

Rol N° 22.270-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Hernán González G. (s) y Sr. Roberto Contreras O. (s). No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, los Ministros (s) Sr. González y Sr. Contreras por haber concluido sus períodos de suplencia.



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A. Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a tres de noviembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

